

Murcia pide aplazar el pago de la deuda por la financiación autonómica

Para bajar el déficit, los encuestados creen que lo primero es reducir los entes públicos y lo último subir impuestos

La situación financiera de las familias sigue siendo muy débil y no cambiará a corto plazo

igual son la mayoría, un 44,5%. Sin embargo, los que afirman en contrarse mejor son ahora un 6,4%, cuando hace seis meses los que tenían esta opinión eran un 9,8%.

El barómetro incluye también preguntas sobre la valoración de la situación económica de las empresas y de las familias, que en ambos casos se quedan por debajo del aprobado. En una escala de 1 a 5, los expertos atribuyen a las familias una situación más desahogada, con una puntuación del 2,40, que las empresas, que se quedan en el 2,36.

Sobre la evolución en estos dos ámbitos, los encuestados creen en su mayoría que seguirá siendo igual, con porcentajes superiores al 50%. No obstante, los que piensan que la situación financiera de las familias empeorará en los próximos meses son más (32,7%) que los que opinan lo mismo de las empresas (27,9%).

Consecuencia de ello es el hecho de que un 46,1% de los colegiados considere que la demanda de bienes y servicios por las familias disminuirá a corto plazo, un porcentaje superior a los que prevén que este factor seguirá estable (42,9%).

Recorte de entes públicos

Si son mayoría (51,6%) los que vaticinan que la compra de viviendas mantendrá el ritmo actual, es decir, casi nulo, en los próximos meses, frente al 38,6% que estima que disminuirá aún más y el 9,8% que cree que aumentará.

El estudio dedica un capítulo especial a las reformas estructurales que serían necesarias para reactivar la productividad y la creación de empleo. Los economistas murcianos se decantan en primer lugar por la reforma de las administraciones públicas, seguidas de las del sistema financiero y del mercado de trabajo.

También son interpelados sobre las medidas más idóneas para reducir el déficit público. Las preferidas por son, por este orden, la reducción del número de entidades públicas, un mayor control del gasto sanitario y congelar las plantillas de las administraciones públicas. La subida de impuestos es la última medida a la que habría que recurrir, según los economistas.

La hacienda regional debe devolver 160 millones al Estado por el dinero de más que percibió en 2008

LA VERDAD

MURCIA. El Gobierno de Murcia pidió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que los 160,5 millones que debe devolver de la liquidación negativa de los anticipos a cuenta recibidos del Estado en 2008, correspondientes al sistema de financiación autonómica anterior, puedan ser pagados una vez superada la crisis económica.

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, explicó que la fórmula de pago actual prevé un año de carencia (2010) y cuatro de plazo (hasta 2014) para abonar el ajuste entre las cuentas reales y las estimaciones que realiza el Ejecutivo español para hacer efectivos los pagos a las regiones, según el antiguo modelo de financiación autonómica.

Del total de 5.500 millones de euros que deben devolver el conjunto de las regiones al Estado, «por los errores de previsión del Gobierno central al no reconocer la existencia de la crisis», según sus palabras, los 160,5 de Murcia representan el 6,7% de lo presupuestado por el Ejecutivo autonómico para ese año, cuando la media nacional es del 6,9%.

En euros por habitante, a cada residente en la Región de Murcia le corresponde pagar 112,5 euros, cifra sólo inferior a la de Madrid, que además tiene saldo positivo en su liquidación de los anticipos a cuenta recibidos del Gobierno central, y a Cataluña, con 93,3 euros por persona.

En relación con su producto interior bruto (PIB) regional, Murcia es la cuarta comunidad mejor parada, tras Madrid, Cataluña y Aragón.

Según indicó la consejera, la previsión de recaudación del impuesto sobre el valor añadido que hizo el Gobierno central de lo que en 2008 debía ingresar la Región de

Murcia fue mejorada por los resultados obtenidos.

García atribuyó este mérito a las rebajas de impuestos y a la política presupuestaria «rigurosa» emprendida por su departamento, que «hicieron que hubiera mayor circulante en el bolsillo de los ciudadanos, que no perdieron tanta capacidad de gasto como calculó el Gobierno central, por lo que el consumo no cayó tanto como éste estimó».

En todo el periodo de vigencia

La Región fue la segunda comunidad que más aumentó sus ingresos con el anterior sistema

del anterior modelo de financiación autonómica, vigente entre 2002 y 2008, sólo la comunidad de Madrid logró un mayor incremento de ingresos que la de Murcia.

Si la media nacional de crecimiento de dichos ingresos en esos siete años fue del 67%, la de la región de Murcia se situó en el 72,6%, según informó la consejera.

En cuanto a la recaudación real de 2002 a 2008, Murcia también se colocó un 9% por encima de la media nacional, como también lo hicieron en distintos porcentajes las comunidades Valenciana, de Madrid y Cataluña.

García indicó que también Castilla y León solicitará un aplazamiento en el pago de los fondos ingresados de más en 2008, así como la de Galicia, que pedirá 10 años de plazo, en lugar de los 5 previstos.

Una vez aprobado el techo de gasto para el control del déficit público nacional, en el Consejo de Política Fiscal se planteó un límite de déficit para todas las comunidades autónomas del 1,3% para 2011 y 2012, y del 1,1% para 2013.



Reunión ayer de la ejecutiva de la Federación de Municipios con la consejera de Presidencia. :: JUAN LEAL

La Comunidad ofrece avalar 300 millones de euros en créditos a los municipios

J. M. A.

MURCIA. El Gobierno regional está dispuesto a avalar hasta 300 millones de euros en créditos para los ayuntamientos de la Región de Murcia. Esta es una de las medidas del plan de rescate diseñado por la Comunidad Autónoma para ayudar a los municipios a superar su mala situación financiera y que fue presentado ayer por la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, al Comité Ejecutivo de la Federa-

ción de Municipios de la Región de Murcia, que preside el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

Para que la Administración regional pueda avalar a los ayuntamientos, será necesaria la autorización del Gobierno central, ya que los municipios tienen prohibido endeudarse a partir del próximo año. Por este motivo, la directiva de la Federación de Municipios acordó solicitar al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, que pida una

reunión con el ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, para tratar este asunto.

Otra de las medidas del plan de rescate es que los aproximadamente 100 millones que la Consejería de Presidencia reparte entre los ayuntamientos puedan usarlos las corporaciones, si así lo deciden, a sufragar el gasto corriente y al pago de deudas con proveedores.

Este fondo incondicionado se nutrirá también con al menos el 50% de las partidas que el resto de consejerías destinan a los municipios. El 50% restante seguirá destinándose en los presupuestos de 2011 para inversiones, con el fin de evitar una caída drástica de la inversión pública, según explicó la Reverte.

La consejera indicó que se realizará un plan de rescate «a la carta»,

Los alcaldes del PSOE piden medidas de choque y «un trato igual para todos»

Los alcaldes socialistas presentes en el Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios de la Región solicitaron ayer al Gobierno regional medidas de choque para hacer frente a las dificultades financieras de los ayuntamientos, además de las propuestas a aplicar a partir del próximo año.

«Necesitamos soluciones a corto plazo, porque el enfermo está muy grave», indicó el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro. El alcalde de Mula, Diego Cervantes, reclamó también «un trato igual para todos», ya que, «en algunos casos los ayuntamientos gobernados por el PP están recibiendo un trato mejor», dijo Navarro.

en función del estado en que se encuentre cada municipio y tras un estudio financiero de cada uno de ellos.

Otras medidas previstas son la exención del pago de determinadas tasas a los ayuntamientos, como la que abonan por publicar sus decretos y órdenes en el Boletín Oficial de la Región, y liberarles de la cofinanciación de proyectos, que serán asumidos a partir de ahora por la Comunidad al 100%.

El secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, acusó al Ejecutivo autonómico de «haber incumplido sus promesas» con los alcaldes, ya que, según dijo, «el dinero que necesitan los ayuntamientos debía salir de la lucha contra el despilfarro, no del endeudamiento, ya que los consistorios necesitan dinero a corto plazo, no más deudas».